



"El problema radical es la lucha de la vida en contra de la muerte": Ignacio Ellacuría

Editorial

Duarte y d'Aubuisson

2

Político

Cabos sueltos entre política y crimen organizado

5

Económico

Economía y crimen organizado

8

Social

Distintas reacciones sobre el asesinato de los diputados del PARLACEN

11

Reporte IUDOP

Rezago, violencia e indolencia: algunos de los obstáculos a la educación

13

Reporte IDHUCA

La paja en el ojo ajeno

15

Rezago, violencia e indolencia: algunos de los obstáculos a la educación

Desde inicios del mes de febrero han aparecido en los periódicos de mayor circulación del país, diversas notas periodísticas señalando las dificultades por las que atraviesa el sector educación, y sobre todo, sus más importantes actores: niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Como podría esperarse, muchas de estas notas están dirigidas a destacar la problemática de violencia que prevalece en las instituciones educativas, que cobra rostro y notoriedad sobre todo cuando se reporta sobre la forma en que las maras acechan ciertas instituciones educativas del Área Metropolitana, para reclutar a nuevos miembros en sus filas, como lo destaca una referencia periodística sobre un supuesto estudio realizado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, al revisar las diferentes noticias, así como algunos datos sobre el sector educación, destacan al menos tres grandes problemáticas que las autoridades deben resolver para garantizar un mejor acceso, permanencia y condiciones para los y las estudiantes en el sistema educativo: el problema de la deserción, el de la repetición y el de la inseguridad y violencia que prevalecen como parte de la cotidianeidad que rodea a los miembros de la comunidad educativa.

En relación con el primer problema, se tiene que según lo reportado por uno de los periódicos, alrededor de 415 niños y niñas desertan diariamente de su escuela, un promedio calculado a partir de los 83 mil niños y niñas que según el MINED abandonaron educación básica durante el año pasado. Por su parte, datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) indican que la mayor cobertura del sistema educativo se da en el tramo entre los 7 y los 12 años, y que es a partir de los 13 años aproximadamente cuando la tendencia experimenta una disminución en el porcentaje de cobertura, que se acentúa sobre todo posterior a los 15 años de edad. Así, la proporción general de no asistencia a la escuela calculada por la Encuesta de Hogares es de alrededor del 11% a nivel nacional. En otras palabras, al menos uno de cada diez niños, niñas y jóvenes en edad de

haber finalizado alguno de los niveles o tener finalizada por completo su educación básica, se encuentra fuera del sistema educativo.

En relación con los motivos por los cuales se ha abandonado el sistema, los datos de la EHPM indican que a la base de los argumentos más frecuentemente utilizados se encuentran razones fundamentalmente de tipo socioeconómico: han desertado por tener necesidad de trabajar, porque los estudios son muy caros, porque no les interesa, porque los padres (o encargados) no quieren que estudien o por la obligación de desempeñar quehaceres domésticos (sobre todo en el caso de las niñas y jóvenes). En estas cinco razones se aglutina más del 80% de las causas, acuñadas por los mismos usuarios del sistema, por las cuales la niñez, adolescencia y juventud a nivel nacional no asisten a la escuela.

La repetición, como otra de las problemáticas que obstaculizan el proceso de enseñanza-aprendizaje, es una situación muy relacionada con la anterior. Según los datos del MINED publicados en la prensa escrita, más de 90 mil niños, niñas y jóvenes reprobaron el grado en 2006, una cifra que representa cerca del 7% de la población estudiantil a nivel nacional. Al respecto, el Viceministro de esta cartera de Estado señala que los niños y niñas que suelen desertar, cuando ya no lo hacen, tienden a repetir el grado. Y estos niveles de repetición se vinculan tanto con deficiencias de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, como con problemas en la asistencia (si el joven no cumple con una asistencia del 80% a clases durante el año escolar no puede ser promovido al grado inmediato superior). Sin embargo, lo que en muchas ocasiones no se releva es que a la base de estas problemáticas se encuentran los mismos factores socioeconómicos que muchas veces limitan e impiden el acceso de niño/as y jóvenes a la escuela, y les privan de ese derecho por tener que solventar muchas necesidades del hogar: trabajar y convertirse en una fuente de ingresos para la familia, cuidar de sus hermanos/as menores, ayudar en los

reporte IUDOP

quehaceres domésticos, o simplemente, por no poder cubrir los gastos y la inversión que para muchas de estas familias implica el tener uno o más hijos/as enrolados en el sistema. En este sentido, lo que muchas veces no se destaca es que si no van a la escuela, si no pueden cubrir con ese piso de asistencia del 80%, o si se mantienen continuamente repitiendo grado es porque las condiciones en las que viven o sobreviven las familias de las que muchos estudiantes provienen no les permiten —directa o indirectamente— gozar de ese derecho.

No es de extrañar entonces que sea precisamente la presencia de estos factores sociales, económicos y culturales la que posibilite el tercer problema que enfrenta la comunidad educativa: la inseguridad y la violencia. En muchos casos, los estudiantes de la red pública de instituciones escolares se convierten en sus víctimas más directas, no necesariamente porque estén enrolados en maras o en pandillas estudiantiles, sino por el simple hecho de asistir a un centro educativo inserto en un contexto de desventaja, marginalidad y abandono estatal en materia de acceso a servicios públicos y de presencia de la institucionalidad encargada de la seguridad pública. Hacia mediados de este mes, y a propósito del robo de un centro escolar en el cantón de Guaymango, la noticia señalaba que esa era la décima institución educativa saqueada desde el 2006. A esta situación de robos y saqueos de los centros educativos, se le suman problemas de poco acceso a servicios (muchas de las escuelas de la red pública se encuentran ubicadas en sectores que no cuentan con los servicios más básicos), infraestructura inadecuada o abiertamente inservible, acoso de pandillas, venta de drogas, entre otras dificultades.

A pesar de que el MINED tiene identificadas las instituciones que enfrentan mayores niveles de riesgo no solo en materia de inseguridad y violencia, sino en cuanto a los indicadores de rezago educativo en general, éstas no cuentan con atención focalizada por parte de las autoridades. Ni siquiera cuentan con el apoyo de la presencia policial que pueda servir de disuasivo a las amenazas externas, tanto de pandilleros como de la criminalidad en general. Esto, a pesar del llamado que muchos directivos y personal docente han hecho en forma reiterada a las autoridades, solicitando patrullajes, apoyo policial o refuerzos de distinto tipo.

Frente a este panorama, la necesidad de una mayor inversión en materia educativa se vuelve indiscutible. Los datos, empero, prueban precisamente lo contrario: frente al énfasis gubernamental en el destino de fondos en políticas de mano dura para el combate a las pandillas, se deja sin resguardo y financiamiento precisamente uno de los espacios de prevención con mayores probabilidades de impacto: la inversión en educación para la niñez y juventud. Por ejemplo, la partida presupuestaria asignada al MINED equivale al 2.7% del PIB proyectado para este año. En el último quinquenio, las cifras indican que la inversión en materia de educación en función del PIB ha descendido del 3.3% que fue asignado en 2002, al 2.7% que se proyecta tendrá en 2007, un promedio que se encuentra por debajo del 3.8% que proyectó y estipuló el gobierno en su Plan Nacional 2021; y que es aún menor a los promedios de asignación presupuestaria de la gran mayoría de países latinoamericanos. Este déficit cada vez mayor en asignación de recursos se refleja claramente en el recorte presupuestario que fue recientemente anunciado para uno de los programas del MINED, encaminado precisamente a la atención de estas escuelas en riesgo a través de acciones preventivas desde la institución. Esto evidencia no solo el desinterés en el tema, sino la miopía e irresponsabilidad con la que muchas de las decisiones políticas son tomadas en este país.

Muchos se preguntan qué hacer para enfrentar la violencia que aqueja a la ciudadanía. Muchos otros se quejan y culpan a las pandillas, a la cultura, a la guerra, a la posguerra, a la pérdida de valores, a la falta de lectura de la Biblia, a la falta de moral, entre otros argumentos esgrimidos sobre todo por los padres de la patria al ser consultados sobre la problemática. Al margen del franco alarde de desconocimiento del tema, en muchos abundan aberraciones al enfocarse y opinar sobre la problemática. Lo que no parece abundar en estos y otros tomadores de decisión es la voluntad política de arremangarse la camisa y poner recursos a la obra en la construcción de mejores —o al menos, mínimas— condiciones para que niños, niñas y jóvenes puedan tener la oportunidad de ejercer uno de sus derechos más básicos, y que más impacto puede tener, en la disminución de la violencia en este país: ser acreedores de una educación de calidad.